

BOLETIN N° 08



OPERACIÓN PÚNICA

Del 08 al 22 de febrero 2016

INDICE

01. UN DIPUTADO DE CIFUENTES, IMPLICADO EN EL MAYOR PELOTAZO DE LA PÚNICA
02. LA UCO INVESTIGA A A 'BAROLO' GONZÁLEZ, EX ALCALDE ALCALA DE HENARES
03. LA AUDIENCIA DENIEGA LA LIBERTAD A GRANADOS POR SU "RED DE INFLUENCIAS"
04. UN TESTIGO RECONOCE QUE EL PP PAGÓ POR MEJORAR LA IMAGEN DE UN ALCALDE
05. EL CANAL DE ISABEL II PAGÓ POR "TRABAJOS FICTICIOS" A LA TRAMA PÚNICA
06. EL JUEZ CASTRO ABRE UNA PIEZA SECRETA SOBRE LAS OBRAS DE LA SEDE DE GÉNOVA, 13
07. EL JUEZ CASTRO EXIGE A RAJOY INFORMES SOBRE LAS OBRAS DE LA SEDE DEL PP
08. GRANADOS CONTROLABA LA VENTA DE SUELO EN LA COMUNIDAD DE MADRID POR MORDIDAS
09. AGUIRRE DIMITE: "LA CORRUPCIÓN NOS ESTÁ MATANDO A TODOS"
10. AGUIRRE: "HE NOMBRADO A MÁS DE 500 ALTOS CARGOS Y DOS ME HAN SALIDO RANA"
11. DOS REGISTROS OCULTOS EN EL PP DE MADRID
12. LOS PAPELES DE GRANADOS REVELAN UNA POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID DE DOS MILLONES DE EUROS
13. GRANADOS OBLIGÓ A UNA FIRMA PÚBLICA A PAGAR 140.000 EUROS POR UN CONCIERTO
14. LA GUARDIA CIVIL BUSCA PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL EN LA SEDE DEL PP DE MADRID
15. EL YERNO DE VILLAR MIR PAGÓ COMISIONES AL PP DE MADRID
16. OPERACIÓN CONTRA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN MADRID

01. UN DIPUTADO DE CIFUENTES, IMPLICADO EN EL MAYOR PELOTAZO DE LA PÚNICA

Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles, intermedió para adjudicar un contrato de 75 millones a Cofely

Daniel Ortiz, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Móstoles, intermedió para que Cofely, la principal empresa de la trama Púnica, ganara un macrocontrato de alumbrado en esta localidad de 200.000 habitantes al sur de Madrid. Así lo cree la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en un informe incorporado al sumario del caso Púnica recopila pruebas de cómo usó su cargo para influir en la adjudicación del contrato público de mayor cuantía de entre los que dieron a la red los municipios investigados en la causa.

El informe que la OCU entregó al juez Eloy Velasco, de más de 300 páginas y con fecha de septiembre de 2015, relata cómo "el concierto delictivo" pretendía influir en el concurso para que fuera Cofely la adjudicataria, "independientemente de cuál fuese la oferta económicamente más ventajosa", a cambio del pago de "notorias comisiones a cargos públicos vinculados al Consistorio de Móstoles". Según las investigaciones de la Guardia Civil, el entonces alcalde y un concejal habían "adquirido un compromiso previo con Cofely incluso antes de la publicación del contrato".

El concejal en cuestión era Alejandro Utrilla, edil adjunto de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles, que —según la UCO— pudo cometer delitos de fraude, revelación de secretos y cohecho. El exalcalde, que es aforado por su actual condición de diputado en la Cámara madrileña, sería autor de delitos de cohecho y fraude, según los investigadores. La empresa se había comprometido a pagar una mordida de 240.000 euros a cambio de las facilidades para obtener el contrato.

El concurso para adjudicar el alumbrado público de Móstoles no siguió los patrones habituales de la trama en otros municipios. En lugar de crear los pliegos de la licitación específicamente para facilitar que ganara Cofely, en este caso "se pusieron trabas a los competidores, de forma que finalmente se desechase la oferta del licitador mejor posicionado y se orientase el concurso a la empresa que querían que lo ganase", asegura el informe.

Con un precio de licitación de 75 millones de euros, el contrato mostoleño era especialmente jugoso para la trama. Los responsables de Cofely llegaron a elaborar un informe anónimo para ayudar al Ayuntamiento a desestimar la oferta de otra de las empresas competidoras, Fulton. Para confeccionarlo accedieron al expediente de contratación valiéndose de "contactos personales con los cargos públicos", asegura la UCO, que detectó correos electrónicos y conversaciones entre los implicados en las que aludían a ese informe anónimo.

"Nos están escuchando"

La minuciosa investigación de la UCO incluye escuchas telefónicas, correos electrónicos e infinidad de pruebas documentales. En una de las conversaciones intervenidas los investigadores escuchan a los implicados bromear sobre la posibilidad de que les estén oyendo.

Constantino: No sigas por ahí. No sigas por ahí... que no sigas por ahí.

Pedro: ¿Por?

Constantino: Pues porque nos están escuchando.

Se trata de Pedro García Pérez y de Constantino Álvarez, los trabajadores de Cofely que presuntamente urdieron el amaño. Los investigadores escucharon al primero decir por teléfono una frase que resultó muy reveladora: "Nadie puede negar que nos han echado una mano en que resultáramos adjudicatarios del contrato". Justo antes hablaba con Álvarez de "resolver lo de los 240.000 euros". Y justo después es cuando este último le pide a García que no siga por

ahí porque les pueden estar escuchando.

El ahora diputado Ortiz no es el único político que tiene relación con el contrato de Móstoles con Cofely. Mario Utrilla, exalcalde del PP de Sevilla la Nueva, municipio muy cercano a Móstoles, colaboró con su hermano Alejandro Utrilla en el amaño del millonario concurso de alumbrado, según el informe de la UCO. Utrilla también fue diputado de la Asamblea de Madrid en la pasada legislatura. El juez Velasco llamó a declarar a Utrilla como imputado en junio pasado, junto con los entonces consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar.

Daniel Ortiz ha rehusado comentar el contenido del informe incluido en el sumario de la trama Púnica, del que el jueves se conocieron varios tomos hasta ahora secretos y que adelantó EL PAÍS. Una portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha remitido una nota de prensa en la que asegura: "Como ya declaré ante la ciudadanía cuando era alcalde y ahora como portavoz en la oposición, mantengo mi actitud de más absoluta indignación con los casos de corrupción y en el caso de la Operación Púnica son falsas todas las acusaciones que hoy he recibido hacia mi persona".

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/19/actualidad/1455899373_511469.html

02. LA UCO INVESTIGA A A 'BARTOLO' GONZÁLEZ, EX ALCALDE ALCALA DE HENARES

Una semana después de que la Guardia Civil acudiera a la sede del PP en la calle Génova dentro del 'caso Púnica' y tan sólo tres días más tarde de que Esperanza Aguirre dimitiera por ello, la Unidad Central Operativa (UCO) ha vuelto a poner en apuros a la ya ex 'lideresa' del PP. Agentes del Instituto armado 'visitaron' el pasado jueves el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (200.000 habitantes) para hacerse con el expediente de la adjudicación de un millonario contrato a la empresa de eficiencia energética Cofely-GDF Suez, una de las mercantiles claves de la trama de corrupción. El caso salpica directamente a Bartolomé González, 'Bartolo', regidor del municipio hasta julio de 2012, actual diputado en la Asamblea de Madrid (y, por tanto, aforado) y una de las personas más cercanas a dimisionaria dirigente 'popular'.

Los agentes acudieron al Ayuntamiento de Alcalá el pasado 18 de febrero. Buscaban el expediente por el que se adjudicó a Cofely un contrato de 14 millones

Los agentes de la UCO acudieron a la sede del Ayuntamiento de Alcalá de Henares el jueves 18 de febrero, según confirmaron a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación y del propio Consistorio. Buscaban, en concreto, el expediente del contrato que el municipio adjudicó a Cofely-GDF Suez por 14 millones de euros y que, según concluyó en marzo de 2015 una comisión de investigación municipal, acumuló numerosas irregularidades en su tramitación. Una sospecha que ya fue refrendada por las declaraciones que hizo ante el juez Eloy Velasco el constructor David Marjaliza. Éste, en su confesión del pasado verano que aún permanece secreta, aseguró que Bartolomé González había recibido supuestamente 60.000 euros de 'mordida' cuando era alcalde de este municipio por favorecer la contratación de Cofely.

Según detalló entonces el constructor al magistrado, la elevada cantidad de dinero le fue supuestamente entregada al político por Ana María Ramírez, secretaria y mano derecha del propio empresario, también imputada en la causa. Esta mujer también ha comparecido recientemente en la Audiencia Nacional y ha ratificado las palabras de su jefe. De hecho, confirmó que las anotaciones encontradas en un documento hallado en uno de los registros recogían, precisamente, los nombres de varios consistorios en los que se habían pagado sobornos y, uno de ellos, era precisamente el de Alcalá de Henares.

El hombre de las listas electorales

De este modo, la nueva línea de investigación abierta vuelve a golpear al entorno más próximo de Esperanza Aguirre. En el propio partido se considera a Bartolomé González como el 'número 2' de facto de la 'lideresa' hasta la reciente dimisión de ésta. De hecho, 'Bartolo' era el encargado de controlar los municipios de la Comunidad de Madrid donde surgían problemas. Todo ello con el aval de la propia dirigente 'popular'. En las últimas elecciones municipales, él

fue una de las cinco personas que oficiaron como "examinadores" de los aspirantes a encabezar las listas del PP en un acto que se presentó como ejemplo de 'regeneración' para evitar la presencia de corruptos. En aquellos comicios fue también la persona designada para modificar las listas electorales de diversos municipios. Entonces se hicieron públicas varias grabaciones en las que supuestamente se le escuchaba imponiendo candidatos en Mejorada del Campo y en Leganés.

La gestión del actualmente aforado 'Bartolo' González al frente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares también es investigada en el sumario de Gürtel y en el 'caso flauta'

El momento de mayor influencia política fue en 2007, cuando fue nombrado presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Era el momento en el que el PP, con Francisco Granados como secretario general, llegó a acumular más poder municipal en la región. También es conocida la buena relación de amistad que le unía con la persona que, precisamente, le ha delatado ahora, el constructor David Marjaliza, con el que había coincidido en la etapa en la que ambos militaron en Nuevas Generaciones. De 47 años de edad los dos, 'Bartolo' presidía las juventudes del PP en la Comunidad de Madrid, mientras el socio de Granados lo hacía en la localidad de Valdemoro, convertida años después en el epicentro de la trama Púnica.

No obstante, el caso Púnica no es el único que ha salpicado en los últimos años a Alcalá de Henares y a su exalcalde. Así, en Gürtel, la investigación sobre las actividades de la trama de Francisco Correa en este municipio madrileño ha sido incluida en la pieza de la segunda época, que aún no está concluida. También aparece la localidad y su antiguo regidor en el llamado 'caso Flauta' (bautizado así en clara referencia al propio 'Bartolo') abierta en el verano de 2015 para investigar supuestas irregularidades en varias adjudicaciones de la concejalía de festejos, entre ellos el de la compra de caramelos para las cabalgatas de los Reyes Magos al triple del precio de mercado a una empresa supuestamente vinculada al propio Bartolomé González. El Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá de Henares, que es quien dirige el sumario, ha extendido las pesquisas a otros municipios que supuestamente compraron los caros dulces gracias a la influencia que tenía 'Bartolo' por su condición de presidente de la Federación Madrileña de Municipios.

<http://vozpopuli.com/actualidad/76421-nuevo-reves-a-aguirre-en-punica-la-uco-investiga-ahora-a-bartolo-gonzalez-su-mano-derecha>

03. LA AUDIENCIA DENIEGA LA LIBERTAD A GRANADOS POR SU "RED DE INFLUENCIAS"

Cree que tiene dinero oculto y pide al juez que termine "a la mayor brevedad" la investigación.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deniega la libertad a Francisco Granados al considerar que existe riesgo de que se fugue o destruya pruebas. Eso sí, insta al juez que instruye la denominada Operación Púnica a que "culmine" su investigación "a la mayor brevedad".

La Sección Cuarta concluye en un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL que el ex secretario general del PP de Madrid, acusado de cobro de comisiones a cambio de favores públicos, no puede abandonar la prisión debido a la "red de influencias y favores" que ha demostrado controlar así como por disponer de fondos que todavía no han sido localizados por la Justicia.

Sostiene la Audiencia Nacional que el "riesgo de fuga" de quién fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid "se ve incrementado tras la aparición de un maletín con un millón de euros en su interior en el altillo del armario del dormitorio de sus suegros en la vivienda en la que estos residen en Valdemoro". "Constituyendo tal hallazgo", añade la Sala, "una evidencia poderosa de poseer activos patrimoniales que se ocultan al juzgado".

OTROS "PRECEDENTES"

Pero es que, además, la Audiencia Nacional considera que dejar en libertad al ex dirigente del PP en este momento "podría poner en peligro el éxito de la investigación". Alude en esta línea a "ciertos precedentes relativos al uso por Granados de una red de influencias y favores" que le

habría llevado a "obtener revelación de informaciones secretas de la Guardia Civil, así como la colaboración de funcionarios del Ayuntamiento y la Policía Local, para la destrucción de expedientes".

La defensa de Granados ha esgrimido que "tras un estudio pormenorizado de la causa se extrae la conclusión de que no se le atribuyen hechos delictivos concretos y sí genéricas imputaciones veladas, vagas e inconcretas referidas a los cargos que ocupó en la Comunidad de Madrid".

SEGUNDO REVÉS DE LA AUDIENCIA

Asimismo, los letrados del principal imputado en la Operación Púnica arguyen que su cliente "tiene arraigo, pues vive con su esposa y sus hijos en la localidad de Valdemoro, tenía un trabajo conocido que desempeñó hasta ser detenido y es un personaje público, por lo que difícilmente podría sustraerse a la acción de la Justicia".

Esta es la segunda vez que se le deniega la libertad a Granados, que ingresó en prisión preventiva en octubre de 2014. El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional rechazó su petición el pasado 28 de diciembre utilizando argumentos similares.

http://www.elespanol.com/espana/20160219/103489927_0.html

04. UN TESTIGO RECONOCE QUE EL PP PAGÓ POR MEJORAR LA IMAGEN DE UN ALCALDE

El testigo afirma que él mismo se negó a sostener con fondos públicos este tipo de contratos para mejorar la imagen de los políticos

Un testigo del Caso Púnica señala directamente al PP como pagador del seguidor Alejandro de Pedro. Hasta ahora los informes policiales de la Guardia Civil hablaban de que Génova había recomendado a De Pedro a diferentes ayuntamientos madrileños para mejorar la imagen de sus alcaldes pero nunca se había revelado que fuese el PP el "pagador" de estos trabajos.

La declaración ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, es del que fue su jefe de gabinete. En su declaración como testigo, Casado asegura ante la Guardia Civil que Alejandro de Pedro fue recomendado, contratado y pagado por Génova para mejorar la imagen de su alcalde, Agustín Juárez y ayudarles a ganar las elecciones.

Según este testigo, los trabajos para mejorar en concreto la imagen de Juárez se extendieron hasta junio del 2011. Después el propio De Pedro era quien proponía ampliar estos trabajos de mejora de imagen del alcalde al ayuntamiento de Collado Villalba.

Según el testigo que fue jefe de gabinete del exalcalde Juárez, los trabajos continuaron hasta finales del 2012, aunque en una última fase fue el propio Alejandro de Pedro quien pidió el dinero de su facturación al propio ayuntamiento que no aceptó la petición del seguidor de la Púnica. Según su relato, estos últimos trabajos fueron pagados bien por el alcalde o por el PP porque él se negó a sostener con fondos públicos este tipo de contratos de mejora de imagen.

De acuerdo a este testimonio, el exalcalde Agustín Juárez -que fue detenido por la Guardia Civil- estuvo en todo momento al corriente de los problemas de facturación que tuvo con el seguidor De Pedro.

http://cadenaser.com/ser/2016/02/18/tribunales/1455813050_078804.html

05. EL CANAL DE ISABEL II PAGÓ POR "TRABAJOS FICTICIOS" A LA TRAMA PÚNICA

El Gobierno del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, PP, se sirvió supuestamente del dinero de dos empresas públicas -el Canal de Isabel II y la Agencia Informática ICM- para pagar campañas de mejora on line de imagen del propio González, de su mano derecha y consejero de Justicia y Presidencia Salvador Victoria y de su exconsejera de

Educación Lucía Figar. Así consta en la parte del sumario de la trama Púnica cuyo secreto levantó el juez Eloy Velasco la pasada semana y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Adrián de Pedro Llorca, hermano del "conseguidor" de la trama Alejandro de Pedro, responsable de una red de periódicos en Internet para lavar la imagen de políticos del PP, entre ellos del expresidente Ignacio González, asegura que parte de los trabajos de mejora de la reputación de González, fueron abonados por el Canal del Isabel II, dependiente del Gobierno regional. El juez está investigando el Canal de Isabel II y sospecha que, aparte de estos trabajos de reputación, este organismo público manipuló e infló contratos con la finalidad de liberar dinero para la caja b del PP de Madrid, que, según fuentes del PP, el cabecilla de la Púnica Francisco Granados dejó vacía tras abandonar la secretaria general del partido.

Adrián de Pedro, en su declaración como testigo ante el juez Eloy Velasco, instructor de la trama Púnica, señaló que trabajaba como coordinador de las empresas de su hermano Alejandro, Eco y Madiva. Y reveló que "la facturación ficticia" que se estaba pagando a Eico y Madiva por esos trabajos "procedía del Canal de Isabel II".

En este momento el juez Velasco está centrando su atención en el Canal de Isabel II ante los indicios de que desde la Comunidad de Madrid se utilizaron las arcas de este organismo público tanto para financiar al PP regional como para que De Pedro cobrase dinero público por poner su infraestructura de comunicación al servicio de la imagen de González. Otra testigo de la trama, Guadalupe Caballero, empleada de las empresas de De Pedro, en la declaración que prestó ante el juez el día 5 de febrero de 2015, abunda también en que fue el Canal de Isabel II el que financió los trabajos de lavado de imagen en Internet de altos cargos de la Comunidad. Señaló al juez que, en un momento dado, De Pedro le dijo que anotase en la contabilidad una deuda de la Comunidad de Madrid con ellos de "de 140.000 euros" y que le comentó que la misma iba a ser abonada por el "el Canal de Isabel II".

El Gobierno de González no solo utilizó supuestamente al Canal para pagar a De Pedro. El sumario tiene acreditados pagos a las empresas de este experto informático por parte de la firma ICM, que dependía del exconsejero Victoria. La Guardia Civil halló a De Pedro, en el registro que se hizo en su domicilio, tres sobres con un total de 82.000 euros, dentro de dos chaquetas, en billetes de 50 euros. Este reconoció que parte de ese dinero procedía de un pago que le hizo un directivo de Indra por sus trabajos para favorecer en Internet la reputación de políticos de la Comunidad.

José Martínez Nicolás, entonces máximo responsable de ICM, también confirmó al juez que De Pedro recibió dinero de Indra a instancia de Victoria. La Comunidad de Madrid daba trabajos a Indra todos los años por valor de unos 16 millones. El juez sospecha que se inflaron contratos con Indra para pagar a De Pedro. Martínez Nicolás dijo que detrás de los pagos de Indra a De Pedro estaba el exconsejero Salvador Victoria. Martínez Nicolás señaló al juez: "Santiago [Roura, alto directivo de Indra] se ha puesto en contacto conmigo y me ha transmitido que la petición solicitada por el dicente, a instancias de mi jefe Salvador Victoria, había sido aceptada. Y que cree que se ha procedido al pago". Martínez Nicolás se refiere a que Victoria le utilizó como "mensajero" para que solicitara a Indra efectuar pagos a De Pedro. En el sumario hay constancia de un pago de 10.000 euros que le hizo en un coche Roura a De Pedro por los trabajos de mejora de la reputación.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/18/actualidad/1455794597_732477.html

06. EL JUEZ CASTRO ABRE UNA PIEZA SECRETA SOBRE LAS OBRAS DE LA SEDE DE GÉNOVA, 13

Solicita a la Audiencia Nacional la agenda de Granados y al PP las facturas de su reforma en la primera planta del edificio.

El juez José Castro ha abierto una pieza separada para investigar los pagos de la constructora OHL al Partido Popular de Madrid. En un auto emitido el pasado día 16, el magistrado balear solicita a la Audiencia Nacional la información existente en la trama Púnica sobre la agenda de Francisco Granados. Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca libra un oficio a la Presidencia del Partido Popular para que "informe sobre las obras de reforma que haya realizado en la planta primera" de la sede central del partido.

La petición del juez Castro llega después de que este diario revelara los vínculos entre el empresario Javier López Madrid y la reforma de las instalaciones que el PP de Madrid ocupa en la primera planta del edificio de la calle Génova. La contabilidad manuscrita de Francisco Granados, localizada en el registro de su domicilio, fue interpretada después por el empresario David Marjaliza, considerado el principal testaferro del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ante el juez Eloy Velasco, Marjaliza mantuvo que las iniciales "JLM" correspondían al yerno de Villar Mir, y las cantidades anotadas en relación a estas siglas, corresponderían a donaciones en dinero aportadas a Granados por el consejero de OHL.

El magistrado enmarca sus pesquisas en la investigación sobre el hospital de Son Espases, otorgado a la constructora de Villar Mir por más de 700 millones de euros. Tanto Castro como la Fiscalía Anticorrupción trabajan con la tesis de que responsables del grupo OHL pagaron comisiones a miembros del PP a cambio de la concesión del contrato público.

http://www.elespanol.com/espana/20160218/103239741_0.html

07. EL JUEZ CASTRO EXIGE A RAJOY INFORMES SOBRE LAS OBRAS DE LA SEDE DEL PP

El magistrado balear pide a la Audiencia Nacional copia de la agenda de Francisco Granados sobre la reforma de la sede del partido

El juez de Palma de Mallorca José Castro reclamó este jueves a "la Presidencia del Partido Popular" —que ejerce Mariano Rajoy— un informe sobre las obras de reforma de la primera planta de la sede nacional del partido, en la calle Génova 13 de Madrid. El magistrado sospecha que la empresa OHL o alguna subcontrata de esta sufragó con dinero b estos trabajos como contrapartida para obtener la adjudicación de la obra del Hospital Son Espases, de Palma de Mallorca, la mayor obra pública de Baleares, con un presupuesto de 635 millones de euros.

El magistrado reclama a la Presidencia de la formación conservadora "el proyecto arquitectónico, presupuesto, licencia de obras que se obtuviera, empresa encargada de la materialización y facturas que obren en su poder". Las obras de la sede nacional del PP, supuestamente realizadas con 1,7 millones de euros en dinero negro, fueron encomendadas a la empresa Unifica, del arquitecto Gonzalo Urquijo.

En la planta 1 de Génova 13 tiene su sede el Partido Popular de Madrid. El magistrado balear, en una resolución notificada hoy, pide a la Audiencia Nacional que le remita una copia de la agenda personal de Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño, en prisión desde octubre de 2014 por el caso Púnica. Castro solicita a su colega Eloy Velasco, instructor de la trama corrupta en la Comunidad de Madrid, que le remita "cuanta documentación guarde relación con las obras de reforma que se hayan realizado en la planta 1ª del edificio sede del PP" en la calle Génova de Madrid. Castro le señala que en caso de que estos documentos tengan el carácter de secreto en el caso Púnica, él abriría una pieza separada en el caso Son Espases y decretaría también el secreto sumarial.

El magistrado balear investiga la adjudicación del complejo hospitalario Son Espases por 635 millones de euros en 2006 por el Gobierno balear de Jaume Matas (PP) y sospecha que el Partido Popular percibió sobornos en especie por obras ejecutadas en el edificio de Madrid por la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado por el caso de la caja b del PP, pieza separada del caso Gürtel de corrupción.

El proyecto de construcción y explotación de Son Espases, fue adjudicado finalmente a la unión temporal de empresas que lideraba la firma Dragados, de la corporación ACS que preside Florentino Pérez, pese a que en un primer momento los técnicos habían puntuado como mejor oferta la que encabezaba OHL de Juan Miguel Villar Mir.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/18/actualidad/1455799687_201851.html

08. GRANADOS CONTROLABA LA VENTA DE SUELO EN LA COMUNIDAD DE MADRID POR MORDIDAS

Son adjudicaciones públicas por centenares de millones de euros desde 2004 en venta de suelo, adjudicación de vivienda protegida y obra civil, según la declaración de Marjaliza. Los investigadores sospechan que parte de las comisiones fueron a parar al Partido Popular de Madrid

El sumario de la Púnica revela que Francisco Granados controló y exigió mordidas para la adjudicación de suelo público y la concesión de vivienda protegida y obra civil en toda la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2011.

Son centenares de millones de euros en adjudicaciones y a cambio reclamaba a los empresarios el pago de una comisión, parte de la cual engrosaba las arcas de la caja B del Partido Popular en Madrid, según las sospechas de los investigadores.

Anticorrupción revela el control del mercado público del suelo por parte de Granados en un informe contenido en el sumario de la Púnica, a cuyo acceso ha tenido acceso la SER.

Un informe de la Fiscalía basado en la declaración del arrepentido socio y cómplice del entramado, David Marjaliza, cuyo interrogatorio de más de 13 horas ante el juez, permanece aún bajo secreto de sumario.

La Fiscalía asevera que Francisco Granados "aprovechó sus continuados cargos públicos en la Comunidad de Madrid" para "situarse al frente de la sociedad pública Arpegio y para gestionar los fondos del Plan Regional de Inversiones y Servicios PRISMA", permitiéndole con ello "controlar ventas de suelo de la Comunidad y la adjudicación de vivienda protegida y de obra civil, solicitando el pago de un peaje a los empresarios interesados" en las adjudicaciones para la consecución de las mismas.

Granados controló desde 2004 la fundación Arpegio, que ha dedicado centenares de millones de euros desde su inicio tanto a la creación de suelo residencial y vivienda protegida, como a la promoción de polígonos industriales.

Según la declaración de Marjaliza recogida en el informe fiscal, esas adjudicaciones tenían lugar a cambio de mordidas. Los investigadores, que solo han encontrado una mínima parte del dinero supuestamente malversado entre los investigados, sospechan que un porcentaje de esas comisiones ilegales abonadas por empresarios a cambio de las adjudicaciones concedidas por Granados, iban a parar al Partido Popular de Madrid.

http://cadenaser.com/ser/2016/02/18/tribunales/1455809210_218970.html

09. AGUIRRE DIMITIÓ: "LA CORRUPCIÓN NOS ESTÁ MATANDO A TODOS"

Esperanza Aguirre ha dimitido de su cargo como presidenta del PP madrileño tras destaparse los últimos casos de corrupción que se dieron cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, y hasta ahora presidenta de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, ha dimitido de su cargo. La decisión la ha tomado después de destaparse los últimos casos de corrupción relacionados con la supuesta financiación ilegal del partido, en el marco de la Operación Púnica.

"No tengo ninguna responsabilidad directa, pero sí política", ha afirmado Aguirre tras abandonar su cargo. Aun así ha reconocido, como ya apuntó el pasado viernes en la comisión de corrupción, que no le "consta que haya habido ninguna financiación irregular, y menos ilícita". Atribuye este desconocimiento a que ella no se ocupaba de "las cuestiones económicas del partido". "A lo mejor me debería haber ocupado", ha añadido después.

Aguirre también ha insistido en que se trata de una "decisión personal" y que lo hace porque "la gente quiere gestos". Un gesto que ella ha transformado en su propia renuncia.

La hasta ahora presidenta del PP de Madrid, ha mostrado su rechazo a los casos de corrupción de su partido. "Nos está matando a todos", ha aseverado. Asimismo, ha asegurado que su formación "no merece tener personas que nos están avergonzando". Entre sus deseos, "que la justicia actúe con celeridad en estos casos".

La expresidenta del PP de Madrid ha afirmado que ha hablado con el presidente del partido para trasladarle la noticia, aceptando Rajoy su renuncia. "Te entiendo", han sido las palabras del secretario general del partido, según la propia Aguirre. Sin embargo, ha reconocido que no le ha dado tiempo a comunicárselo a la mayor parte de sus compañeros.

http://cadenaser.com/emisora/2016/02/14/radio_madrid/1455455710_220114.html

10. AGUIRRE: "HE NOMBRADO A MÁS DE 500 ALTOS CARGOS Y DOS ME HAN SALIDO RANA"

Esperanza Aguirre defiende a sus exconsejeros imputados en el 'caso Púnica' y solo se desmarca de Granados y de López Viejo por su papel en Púnica y Gürtel

La presidenta del PP madrileño desde 2004, Esperanza Aguirre, ha realizado una defensa cerrada de los 33 años que ha desempeñado cargos públicos y se ha desmarcado de los casos de corrupción protagonizados por consejeros de su confianza y a los que ella misma nombró en su etapa al frente de la Comunidad de Madrid. "Mi carrera política es larguísima y he manejado más de 200.000 millones de euros, ¿verdad que es increíble? He pasado seis años en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, he sido ministra de Educación, presidenta del Senado y he sido nueve años presidenta de Madrid, que salían a razón de 17.000 millones al año. [En ese tiempo] He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana. De momento, dos, y ninguno ha sido condenado. El señor [Francisco] Granados, que ya saben dónde está, y el señor [Alberto] López Viejo", ha afirmado este viernes en su comparecencia en la comisión especial sobre corrupción de la Asamblea de Madrid.

"Financiación ilegal del PP de Madrid, que a mí me conste, nunca", afirmó el jueves y ha repetido hoy Aguirre, que se comprometió a la "colaboración a tope" con la justicia. "El PP ha pagado la consultoría online de campaña electoral de 2011 y tiene la factura. Las encuestas que encarga el PP de Madrid las paga el PP de Madrid", ha insistido en su comparecencia. Aunque su inicio estaba previsto para alrededor de las 14.00, la presidenta del PP de Madrid ha llegado al Parlamento regional a primera hora de la mañana, alrededor de las 8.30. Antes de su intervención en el Parlamento regional, Aguirre ha aseverado que no le ha llamado "nadie" de la dirección nacional del partido y ha afirmado que se siente respaldada por Génova. "Cómo no", han sido sus palabras. La comparecencia de Aguirre se produce un día después de que la Guardia Civil realizara un registro en la sede del PP de Madrid —en la primera planta de la sede del partido en la madrileña calle Génova— buscando indicios de una posible financiación irregular del PP en la región y el más poderoso del país.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) analizaron el ordenador del exgerente en Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner, que dimitió en octubre de 2014 por su implicación en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid (gastó 58.000 euros en tres años). El exgerente del PP de Madrid mantenía desde entonces "un despacho administrativo", según la jerga empleada por responsables del partido. La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, ha mostrado su malestar por que el PP madrileño mantuviese un tiempo a Gutiérrez Moliner. "Este señor deja de ser gerente, pero la contratación particular que haga el PP de Madrid ni la controlo ni la dirijo", dijo este jueves en una entrevista en 13tv.

La presidenta de la Comunidad entre 2003 y 2012, que estaba obligada a acudir a la comparecencia, que ha sido exigida por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, ha reiterado en el Parlamento su confianza en Salvador Victoria y Lucía Figar, exconsejeros del Gobierno regional imputados en la trama Púnica. "El señor Victoria fue secretario general del Consejo y después, consejero de Asuntos Sociales. Es una persona que tiene toda mi confianza. De momento, sí", ha indicado Aguirre sobre el exconsejero de Presidencia, nombrado en esa cartera por el sucesor de Aguirre, Ignacio González, y previamente secretario del Consejo de Gobierno y consejero de Asuntos Sociales.

"Sigo teniendo mi confianza en la señora Figar, absolutamente", ha añadido de la exconsejera de Educación. "Hay imputaciones e imputaciones, pongo la mano en el fuego por Figar y por la señora Gallego", ha reiterado Aguirre, en referencia también a Isabel Gallego, directora general de Medios en su Gobierno y el de González e imputada en Púnica. A diferencia que con Victoria, Aguirre ha puesto por ambas "la mano en el fuego". "Si en algo me he equivocado es que personas en las que confiaba están ahora en tela de juicio. Espero que los tribunales les juzguen y si son condenados que devuelvan lo que se han llevado (...). He cesado a todos los que tienen un mínimo indicio [de su involucración en casos de corrupción]. La señora Gallego tiene cero indicios", ha cerrado filas Aguirre con Gallego, a la que mantiene como jefa de prensa del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid.

En su intervención, Aguirre ha negado conocer irregularidades en la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad (ICM). Otro de los imputados en Púnica, José Martínez Nicolás, exconsejero delegado del organismo público, declaró que Victoria, que presidía el consejo de administración de ICM, le ordenó pedir a Indra saldar una deuda de 10.000 euros con Alejandro de Pedro, al que el juez Eloy Velasco otorga un papel primordial en Púnica. "El contrato de la informática lo desconozco. Desconozco totalmente, salvo en mi papel de usuario, los temas de la informática. No tengo los conocimientos técnicos para decir si es mejor suspenderlo o dejarlo todo", se ha descolgado Aguirre.

La expresidenta regional tampoco ve problema alguno en la Ciudad de la Justicia, en la que la Comunidad de Madrid derrochó 105 millones y solo cuenta con un edificio, sin terminar, de los 15 previstos. "Los ciento y pico millones no se han tirado, ahí están: en el edificio de la cosa esa forense [el Instituto de Medicina Legal], en las carreteras subterráneas... A partir de 2008 decidimos suspender toda la idea de la Ciudad de la Justicia, podrán decir que era megalomaniaco y nos le quitaría la razón, pero no iba a costar un euro al contribuyente: la venta de las sedes judiciales iba a financiar los proyectos de los mejores arquitectos del mundo", se ha enrocado. El Instituto de Medicina Legal, en el que los Gobiernos de Aguirre y González pretendían agrupar las funciones del Instituto Anatómico Forense, ha perdido un 20% de su valor desde su finalización en abril de 2010. Una tasación del inmueble, cuyo coste fue de 21,4 millones de euros, valoró la infraestructura en 16,9 millones a finales de 2013.

El contexto en que se ha producido la comparecencia de Aguirre en la comisión de corrupción abierta en el Parlamento de Madrid no podía ser peor para el PP. Asolado por distintos casos de corrupción y cuyo presidente y dirigente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúne esta tarde a partir de las 17.00 en el Congreso con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que el Rey ha encargado la tarea de afrontar su investidura tras la negativa de Rajoy.

El desarrollo de la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid ha coincidido con la citación del PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas, extesorero popular. Esta semana también es objeto de polémica, incluidas las filas del PP, de la presencia de Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado, lo que permite a la exalcadesa de Valencia mantener la condición de aforada en plena Operación Taula. La investigación apunta a Rita Barberá, según fuentes del caso. El juez Eloy Velasco, el mismo que instruye el caso Púnica, también investiga sobornos a altos cargos de la firma estatal Acuamed, operación que ha provocado la dimisión de Federico Ramos, mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/12/actualidad/1455268277_467608.html

11. DOS REGISTROS OCULTOS EN EL PP DE MADRID

En julio de 2015, entraron en dos ocasiones en la sede del PP de Madrid para pedir los correos de Granados y las facturas de las empresas relacionadas con la Púnica

Todo el mundo habla de dos registros en Génova pero, en total, han sido cuatro. Hay dos que no se han hecho públicos. Se produjeron durante la primera quincena de julio de 2015 en el PP de Madrid. Entonces, las fuerzas de seguridad fueron a reclamar los correos electrónicos de Francisco Granados, además de los de otros dirigentes conservadores y las facturas de las empresas relacionadas con la Operación Púnica.

Con estas son tres las ocasiones que han entrado en la formación regional. Se debe sumar a ellas, la intervención del pasado jueves cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por orden del juez Velasco, se llevó una copia del disco duro del exgerente, Beltrán Gutiérrez.

En la cúpula nacional recuerdan que esto siempre ha sucedido en la primera planta para desvincularse por completo de ello. Ellos ya afrontaron un episodio que mucho populares vivieron con auténtico bochorno. El famoso 19 de diciembre de 2013, cuando la policía nacional estuvo 14 horas buscando información por las obras de reforma, investigadas dentro del caso Bárcenas.

Cuando se produjeron los registros de julio, Mariano Rajoy estaba inmerso en informar sobre el último Consejo Europeo. Justo en esos días se celebró la conferencia política del PP en la que se hablaba tanto de regeneración. En esa cita se le vio hablando con Esperanza Aguirre. La semana pasada, mientras se producía la noticia, el presidente en funciones se reunía con Albert Rivera. El líder de Ciudadanos le propuso precisamente un gran pacto nacional contra la corrupción. Y él dijo que estaba dispuesto a escuchar cualquier planteamiento que le hicieran.

http://cadenaser.com/ser/2016/02/15/politica/1455532841_996933.html

12. LOS PAPELES DE GRANADOS REVELAN UNA POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID DE DOS MILLONES DE EUROS

Los investigadores sospechan además que el millón de euros que se encontró en casa del suegro de Granados procede también del empresario Javier López Madrid

La agenda de Francisco Granados recoge un total de dos millones de euros que presuntamente el PP de Madrid ha recibido del empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de OHL y yerno del también empresario Juan Miguel Villar Mir. Según estos papeles del que fuera número dos de Esperanza Aguirre, el empresario hizo multitud de entregas de dinero al exgerente del Partido Popular de Madrid, Beltrán Gutiérrez. Fuentes cercanas a esta investigación aseguran que en principio todo el dinero, hasta dos millones de euros, se entregó en metálico. Lo que se investiga ahora es el periodo de tiempo que el Partido Popular madrileño estuvo recibiendo estas importantes cantidades de dinero del empresario López Madrid.

Los investigadores creen que los papeles de Granados revelan una posible financiación ilegal del PP. La investigación trata de concretar ahora cuántas entregas de dinero se hicieron acompañadas de contratos. En los cinco registros que se practicaron este jueves en los despachos de los implicados y en las empresas, la Guardia Civil se ha incautado de material informático, documentos, contratos y correos electrónicos que envió y recibió Francisco Granados.

David Marjaliza, el testaferro de Granados que ahora está colaborando con la justicia, es quien ha puesto sobre la pista a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). El pasado noviembre el exsocio de Granados reconoció que las iniciales "J.L.M." y "B.G." que aparecieron en la agenda de Granados correspondían a Javier López Madrid y Beltrán Gutiérrez. El exgerente del PP de Madrid ya apareció en las diligencias del caso Gürtel relacionado con unas facturas por servicios prestados al PP de Madrid por una empresa de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Gutiérrez fue además uno de los consejeros de Bankia que imputado por las tarjetas black.

Los investigadores sospechan además que el millón de euros que apareció en un altillo de la casa del suegro de Granados podrían proceder también del empresario Javier López Madrid. Es otra de las claves de esta investigación. Según las diligencias practicadas, todo apunta a que fueron varias entregas en metálico directamente al que fue número dos de Esperanza Aguirre encarcelado en la cárcel de Soto del Real por este sumario.

El juez Velasco preguntó al suegro de Granados, médico jubilado, cómo era posible que un maletín con un millón de euros que no tiene patas, llegase hasta el altillo del armario. El suegro de Granados respondió: "No lo sé, señoría, en mi casa ha entrado mucha gente de Ikea y fontaneros".

13. GRANADOS OBLIGÓ A UNA FIRMA PÚBLICA A PAGAR 140.000 EUROS POR UN CONCIERTO

Arpegio, dedicada al urbanismo, patrocinó el espectáculo, organizado por Waiter Music

Esta firma entregó numerosas dádivas y comisiones al exsecretario general del PP de Madrid

El 31 de marzo de 2007 el espectáculo Night of the Proms recaló en el Palacio de los Deportes de Madrid. Prácticamente desconocido en España, consiste en juntar música clásica con pop. Aquella noche una orquesta sinfónica de unos 60 miembros, un coro infantil y artistas como Mike Oldfield, Tears for Fears, John Miles y Ana Torroja deleitaron a un público que, en su mayoría, no pagó los 50 euros que costaba la entrada. Miles de ellas se regalaron. En realidad quien pagó el espectáculo fue el erario público. La Fundación Arpegio patrocinó el evento, organizado por Waiter Music, con 139.200 euros por orden de Francisco Granados, entonces consejero de Presidencia y mano derecha de Esperanza Aguirre.

Así se lo contó hace un mes al juez que instruye el caso de la trama Púnica, Eloy Velasco, la que entonces era gerente de la Fundación Arpegio, Carmen Plata. Arpegio, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el suelo, está, junto con el Canal de Isabel II, en el centro de las pesquisas sobre la trama. Velasco llamó a declarar a Plata después de saber que Granados intermedió para que la Fundación Arpegio patrocinara el concierto de Waiter Music, la empresa de espectáculos y eventos que presuntamente pagaba comisiones para obtener contratos por toda la Comunidad de Madrid.

"Me lo plantea Granados", dijo Plata al juez en su declaración, que consta en la parte del sumario que permanecía secreta hasta hoy y a la que ha tenido acceso El País. Se refiere a cómo llega hasta la Fundación Arpegio la propuesta para patrocinar el concierto. A preguntas del juez, Plata asegura que le pareció que entraba dentro de los "fines sociales y culturales" de la fundación, creada en 2006, es decir, un año antes del concierto, por el propio Francisco Granados. Velasco llega a preguntarle si es consciente de que fue creada "ex profeso para evitar pasar por la Ley de contratos públicos". Ella lo niega.

Plata, que fue concejal del PP en Getafe entre 1995 y 2014, fue nombrada gerente de la fundación en diciembre de 2006 y continuó en ese puesto hasta junio de 2011. Es ella la que firma el convenio con Waiter Music. A Velasco le interesa saber qué recibía a cambio del patrocinio Arpegio: "publicidad", "entradas con el logo de la fundación", salir en las cuñas de radio y ruedas de prensa en las que se cita a Arpegio, contesta Plata, que asegura desconocer qué relación tenía Granados con el responsable de la empresa Waiter Music, José Luis Huerta. "¿Le dio la impresión de que Granados quería favorecerle?". Ella lo niega.

Plata aportó a su declaración la memoria de actividades económicas que Huerta envió a la fundación tras el concierto, en la que se recoge que Waiter Music también consiguió dinero de otros lugares en la Comunidad de Madrid. En concreto, una subvención de 225.000 euros que ayudó a sufragar la contratación del espectáculo. A cambio del patrocinio, la Fundación Arpegio también recibió entradas gratuitas. Muchas de ellas se repartieron en la Dirección de Juventud de la Comunidad de Madrid.

El juez sospecha que el patrocinio de Arpegio se planteó a última hora, cuando Huerta comprobó que no se estaban vendiendo las entradas a buen ritmo y quiso tener otra fuente de ingresos. Algo que parece demostrar un correo electrónico, de 29 de marzo, es decir, solo dos días antes del concierto, en el que Plata insta a Huerta a firmar el convenio. Velasco insiste en preguntarle por qué envió ese email. "No recuerdo nada de ese correo. Hace nueve años", contesta Plata, que sin embargo sí recuerda que inicialmente se iban a destinar 200.000 euros al patrocinio y que fue ella la que recomendó reducir la cantidad. "No me parecía oportuno".

Plata trabaja actualmente en la empresa pública Arpegio. Según fuentes del Gobierno regional, ocupa un puesto técnico y ejerce labores administrativas, es decir, ya no tiene cargo directivo. En esta empresa pública los trabajadores son personal laboral, no funcionarios.

Arpegio es una de las tres firmas públicas investigadas por el juez Velasco, junto con el Canal de Isabel II y la Agencia de Informática de la Comunidad ICM. Además de Granados y la exgerente de la fundación, otra de las personas que se relacionan con esta empresa es Jaime González Taboada, que en la época ocupaba la dirección general de relaciones con la Administración Local y que actualmente es número tres en el Gobierno de Cristina Cifuentes.

El socio y testaferro de Granados David Marjaliza pactó con el juez y la fiscalía una reducción de pena a cambio de contar toda la verdad de la trama. Declaró durante tres días e implicó a González Taboada en la trama, si bien el juez no le ha citado.

Según fuentes de la investigación, la Fundación Nuevo Arpegio, que fue la que patrocinó el concierto de los 140.000 euros que organizó la firma afin a Granados Waiter Music, estaba situada en un local alquilado por Arpegio, matriz de la fundación, a familiares de Carmen Plata, exgerente de Arpegio.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/18/actualidad/1455796052_421759.html

14. LA GUARDIA CIVIL BUSCA PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL EN LA SEDE DEL PP DE MADRID

Los agentes registran las casas del exgerente y un empresario, además de tres oficinas

La última operación de la trama Púnica llevó este jueves a la Guardia Civil hasta la sede central del Partido Popular en Madrid, en busca de documentos de su exgerente, Beltrán Gutiérrez Moliner. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó este y otros registros ante una posible financiación irregular del PP y a raíz de las notas de una agenda —aún bajo secreto sumarial— del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados. Los agentes registraron otros cinco domicilios, incluidos el de Beltrán y el del empresario Javier López Madrid, y entraron en la sede de la empresa Villar Mir, matriz de OHL.

Un total de cinco registros en domicilios y otros dos en sendos despachos de la sede central de los populares madrileños —el PP nacional y el de Madrid comparten oficinas en la calle de Génova— y en la sede del grupo Villar Mir son los últimos coletazos de la investigación de la trama de corrupción Púnica que lleva a cabo el juez Eloy Velasco desde la Audiencia Nacional. El objetivo: intervención de material de documentación para posteriores análisis, en el marco de una investigación por la supuesta financiación irregular del PP en Madrid. No obstante, de momento, los hechos investigados por el magistrado podrían encajar en los “delitos de cohecho y blanqueo de capitales”, según señalaron fuentes jurídicas.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) entraron por la tarde en las oficinas del PP para revisar y analizar el ordenador del exgerente en Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner. Fuentes del partido que lidera Mariano Rajoy confirmaron que habían entrado “sobre las 16.30 preguntando por Beltrán”, quien desde que se conoció su implicación en el caso de las tarjetas opacas black tiene “un despacho administrativo”, informa Javier Casqueiro.

Las mismas fuentes matizaron que “revisaron con él documentos y su ordenador, pero no se lo llevaron”. La “visita” de los guardias duró media hora, según los testigos. Las oficinas de los populares madrileños están en la primera planta de su sede central. Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño, contó, tras acudir a las oficinas: “No es la primera vez que vienen [los agentes]. Ya vinieron a ver Correos de Granados y facturas de la Púnica”. Aguirre, que remachó que el partido presta “colaboración a tope”, aseguró que “no hay indicios ni está probado nada de financiación ilegal”. La dirigente popular explicó por qué Gutiérrez Moliner, pese a haber sido destituido, mantenía despacho en Génova: “Trabaja aquí porque es un funcionario del partido, imputado como otros muchos señores, entre otros el padre de uno de los que mañana me va a interrogar en ese linchamiento comisión en la Asamblea”, informa Natalia Junquera. Aguirre comparece hoy en la comisión sobre corrupción abierta en la Cámara autonómica madrileña.

Fuentes jurídicas confirmaron que los agentes también registraron el domicilio del exgerente y el del empresario Javier López Madrid —yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir—. Además, se llevaron documentación de un despacho del Grupo Villar Mir, matriz de OHL,

donde el primero es miembro del consejo de administración. Ambas empresas tienen sus oficinas en la llamada Torre Espacio.

Los registros se producen como consecuencia de un manuscrito incautado al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Granados. El detonante ha sido una agenda hallada entre los documentos que se le incautaron en su día a Granados, exsecretario general del PP y otrora hombre de confianza de Aguirre, y actualmente preso. Entre esos papeles intervenidos, que forman parte aún de la parte del sumario que permanece bajo secreto, figuran pagos de importantes sumas de dinero junto a las iniciales de Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL.

Marjaliza colabora

Las pesquisas tratan de acreditar si, como señala la documentación intervenida, López Madrid pagó fuertes sumas de dinero al PP madrileño y contribuyó a una financiación ilícita del partido. La investigación de Velasco se ha visto facilitada por otro puntal de la trama Púnica: el empresario David Marjaliza, socio y amigo íntimo de Granados, quien ha interpretado el contenido de las agendas en las que aparecen las cantidades de dinero entregadas por OHL y las iniciales del nombre de López Madrid. Este compartió paseos en barco con Granados. Marjaliza, que salió de la cárcel el pasado 31 de diciembre tras pagar una fianza de 100.000 euros, y Granados supuestamente amañaron múltiples pelotazos urbanísticos cuando el segundo era alcalde de Valdemoro (Madrid).

El nombre de Villar Mir figura en los papeles de Luis Bárcenas como donante de 300.000 euros al PP nacional y, según Bárcenas, tenía mucho interés en Mariano Rajoy supiera que hacía aportaciones al partido. Gutiérrez Moliner dimitió tras conocerse que gastó 58.000 euros con una tarjeta opaca de Caja Madrid. En noviembre de 2014, tras la dimisión, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, instó al PP de Madrid a explicar por qué mantenía como trabajador del partido a su exgerente. Cospedal recordó que, tras conocer el uso de la tarjeta opaca, tomó "inmediatamente" la decisión de pedir el cese de Gutiérrez Moliner porque su puesto tenía una responsabilidad "con carácter nacional"

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/11/actualidad/1455210116_950151.html

15. EL YERNO DE VILLAR MIR PAGÓ COMISIONES AL PP DE MADRID

La UCO investiga un manuscrito que señala también al gerente autonómico.

Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir y miembro del consejo de administración de OHL, habría abonado importantes cantidades de dinero al Partido Popular. Así lo revela al menos la agenda de Francisco Granados, el documento manuscrito requisado al ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante los registros de la Operación Púnica y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga desde el pasado mes de noviembre. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, el manuscrito refleja una serie de pagos junto a las letras "JLM", iniciales que los agentes atribuyen de forma indiciaria al yerno de Villar Mir y consejero delegado de OHL.

Fue el empresario David Marjaliza, testaferro de Granados y que ahora colabora con la Justicia, quien puso a los agentes en alerta sobre la existencia del documento. El pasado 13 de noviembre y tras analizar la documentación localizada en los distintos registros, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le mostró por primera vez la agenda al hombre de confianza de Granados. Marjaliza reconoció allí la letra de su jefe e identificó varias de las abreviaturas, anotaciones como "me", en inglés, que corresponderían al dinero detraído por el propio Granados o las de "JLM", señalado como el empresario Javier López Madrid.

300.000 EUROS

No es la primera vez que los responsables de OHL aparecen relacionados con presuntos pagos al Partido Popular. El pasado domingo este diario reveló la disposición de Matas a pactar con la Fiscalía. En su relato, el ex presidente balear valora confesar que recogió en Génova las instrucciones para amañar un contrato millonario a favor de Villar Mir. Según su versión, Matas recibió la llamada del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, para que acudiera a

la sede central del partido. En Madrid, Matas ha confesado a su entorno que recibió un escrito detallado con las instrucciones que debía seguir la Mesa de Contratación del Gobierno balear. El objetivo era otorgar el mayor concurso público de la zona –el hospital de Son Espases, con 778 millones de euros de presupuesto inicial y que ahora investiga la Justicia- a la constructora OHL.

En julio de 2013, el nombre de Villar Mir se cruzó de nuevo con la presunta contabilidad B del PP. Y lo hizo por boca de Luis Bárcenas. El ex tesorero del PP declaró en la Audiencia Nacional que el presidente de OHL le mostró su voluntad de donar 300.000 euros al partido meses antes de las elecciones generales de 2011. Según Bárcenas, Villar Mir tenía especial interés en que Mariano Rajoy conociera su pago. Ante el juez, Bárcenas aseguró desconocer si se materializó la entrega, ya que derivó al empresario al actual presidente en funciones del Consejo de Estado, José Manuel Romay Becaría, que le sustituyó al frente de las finanzas del partido.

Tampoco es la primera vez que el nombre de Javier López Madrid aparece relacionado con trama Púnica. En el inicio de la investigación, los agentes de la Guardia Civil analizaron el uso que David Marjaliza y otros imputados hacían del yate que Javier López Madrid tenía amarrado en Marbella, un barco escriturado a nombre de su madre y controlado por la sociedad LM Gestión. Además, los agentes investigan el uso que tanto Marjaliza como López Madrid le dieron a dos sociedades, dos empresas en las ambos empresarios fueron socios durante un tiempo: Alora Gestión y Arena Innovación y Promoción.

APUNTES PARA BELTRÁN GUTIÉRREZ

En su declaración del 13 de noviembre ante el juez Eloy Velasco, David Marjaliza ayudó a interpretar las anotaciones reflejadas en la agenda manuscrita de Granados. El empresario aseguró ante el juez que las iniciales “B.G” corresponderían a Beltrán Gutiérrez, ex gerente del PP de Madrid y cuyo nombre apareció ya en las investigaciones del caso Gürtel en relación con facturas por servicios prestados al PP de Madrid por una empresa de Francisco Correa, Special Events, que habrían sido pagados por la fundación Fundescam. Gutiérrez, muy próximo a Esperanza Aguirre, fue también uno de los consejeros de Bankia que disfrutó de ‘tarjetas black’.

La agenda de Francisco Granados haría referencia también a Ignacio (Nacho) Palacios, detenido por la UCO el 18 de noviembre, cinco días después de la comparecencia de Marjaliza ante el juez. Los investigadores creen que Palacios era el ‘cobrador’ de Granados, la persona que acudía a las oficinas del constructor para recoger la parte de las comisiones que correspondían al político del PP por la recalificación de terrenos y adjudicación de parcelas para edificar viviendas protegidas, entre otros pagos supuestamente ilícitos que habrían ido a parar a manos del ex dirigente del PP de Madrid y ex consejero de Esperanza Aguirre.

http://www.elespanol.com/espana/20160208/100739927_0.html

16. OPERACIÓN CONTRA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN MADRID

La Guardia Civil ha entrado en la sede del PP de Génova y ha analizado el ordenador del exgerente regional del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner. El juez Eloy Velasco registra además los domicilios del empresario de OHL, Javier López Madrid, y de Gutiérrez Moliner por supuestos pagos del primero al segundo, detectados en los ‘papeles de Granados’

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, según fuentes jurídicas, han registrado este jueves el domicilio y dos despachos de Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de OHL y yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir. También la casa y el despacho en la sede de Génova 13 del exgerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner, por los supuestos pagos del empresario, de decenas de miles de euros, al Partido Popular de Esperanza Aguirre. La Guardia Civil ha entrado además en la sede del PP de Génova y se ha llevado el contenido del ordenador del exgerente regional del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner.

Los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

Es parte de la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid en la trama Púnica lo que investiga el juez Eloy Velasco. Los registros se producen como consecuencia de un manuscrito incautado al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Granados, que ha sido interpretado para los investigadores por el seguidor, David Marjaliza.

Él fue quien identificó las siglas J.L.M. que figuraban en el documento con el nombre del empresario. Al lado de ese acrónimo había una cantidad anotada de forma manuscrita que supuestamente era trasvasada a otra persona con las siglas B.G., que Marjaliza corroboró que se trataba del gerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez.

Ese documento es una especie de contabilidad B de Granados, añaden fuentes jurídicas, con pagos de López Madrid al gerente regional para financiar de forma ilegal al PP de Madrid.

Tanto Javier López Madrid como Beltrán Gutiérrez Moliner están también involucrados en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Gutiérrez tuvo que abandonar por ello la gerencia del partido. No obstante, como sucedió con Bárcenas, el Partido Popular sigue manteniéndole el despacho en Génova 13 y sueldo.

El exgerente regional ha sido relacionado además con el caso Gürtel, ya que firmó diversas facturas para abonar a las empresas de Francisco Correa los actos de campaña que el líder de la trama organizaba para la candidata a la presidencia de la Comunidad en 2003.

La investigación ha detectado otras formas de supuesta financiación irregular de la formación conservadora en esta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones. Tal y como avanzó la Cadena SER, las pesquisas han detectado que varias empresas constructoras, entre ellas FCC, Urbaser, Avintia u Ortiz Construcciones y Proyectos, pagaron encuestas electorales en municipios del Partido Popular donde obtenían adjudicaciones públicas. El juez también investiga si la empresa Waiter Music facturó a bajo coste los actos que organizaba al PP madrileño, a cambio de adjudicaciones de eventos festivos en los municipios implicados.

Precisamente este viernes Esperanza Aguirre comparecerá en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid para analizar las contrataciones efectuadas por la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), vinculada al caso Púnica. La comparecencia de la actual presidenta del PP de Madrid y portavoz de este partido en el Ayuntamiento de la capital está prevista en torno a las 13.00 horas.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE OHL

En relación con las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre la orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la conocida como Operación Púnica, OHL desmiente que se hayan registrado las oficinas de su sede social en Madrid, situadas en las plantas 8 a 17 del edificio Torre Espacio, y que el vocal del Consejo de Administración Javier López Madrid forme parte de la dirección de la compañía y ostente ninguna posición ejecutiva en la misma.

Asimismo, la compañía también desmiente haber realizado ningún pago al Partido Popular.

http://cadenaser.com/ser/2016/02/11/tribunales/1455209523_575578.html